



REAL AUTOMÓVIL CLUB VASCO NAVARRO (RACVN), 14 DE MAYO DE 2021

EL RACVN SE OPONE A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE APLICAR PEAJES EN TODAS LAS AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

COMUNICADO
DE PRENSA
SERVICIOS

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) se muestra contrario con la última medida propuesta por la DGT, que consiste en la implantación de peajes en todas las autovías españolas en 2024.

El RACVN recuerda que los conductores abonan todo tipo de impuestos por la compra y uso de sus vehículos y denuncia que se quiere hacer pagar de nuevo al conductor por algo que ya paga. El club automovilista considera falsa la tesis del director de la DGT, Pere Navarro, en el sentido de que “una abuelita sin coche está pagando por las carreteras” y señala que precisamente la medida del Gobierno va a acabar perjudicando a “la abuelita” y las economías domésticas más humildes (de forma directa o indirecta) porque el pago de peajes se va a traducir en un encarecimiento del producto final de todos los bienes y servicios.

Para el RACVN, la medida podría provocar un efecto disuasorio del uso de autopistas y autovías (las vías más seguras), frente a las carreteras secundarias, en las que se producen la mayoría de los accidentes mortales.

El club automovilista teme que la medida busca convertirse en una fuente de ingresos destinados a fines distintos al uso del automóvil y recuerda que el Estado debería garantizar una red de carreteras públicas seguras y bien mantenidas, sin necesidad de un copago, ya que son fundamentales para la movilidad de las personas y para el funcionamiento del propio país.



El que lo usa ya lo paga

El RACVN denuncia que se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Según la DGT la medida está orientada a hacer que pague quien use las carreteras y que pague más quien más las utiliza. El RACVN recuerda que más del 50% de lo que se abona por el combustible se corresponde a impuestos. Quien más kilómetros realiza y, por lo tanto, quién más utiliza su vehículo, consume más combustible y por lo tanto acaba pagando más impuestos por su uso. Además, la compra y mantenimiento de vehículos privados y de uso profesional está sujeta al abono de todo tipo de impuestos desde el momento de su compra (impuesto de matriculación, impuesto municipal, impuesto de estacionamiento, estacionamiento regulado y aparcamientos, los IVAs de las revisiones y mantenimiento, neumáticos, recambios y reparaciones, los peajes de las autopistas, etc.). Los conductores aportan unos 30.000 millones de euros al año a las arcas del Estado. ¿Dónde van a parar todos esos impuestos?

Con la medida del Gobierno, “la abuelita” va a acabar pagando más

El director de tráfico, Pere Navarro, se refirió a que “la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene coche, está pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras”. El RACVN considera esas declaraciones alejadas de la realidad. El director de la DGT obvia que los conductores de vehículos privados y los transportistas pagan (y mucho) por la posesión y uso de sus vehículos en impuestos, unas cantidades deben destinarse al mantenimiento de las vías para que esa “abuelita” no pague.

Si los transportistas y conductores privados que utilizan su vehículo para el desempeño de su trabajo ven incrementarse el coste de desplazamiento mediante los peajes, éstos incluirán ese coste en la factura final del servicio o producto que ofrecen. A ese coste habrá que añadirle otro incremento adicional para que estos conductores puedan paliar también la subida de precio de productos y servicios que ellos también adquieren como consumidores.

Es decir, el coste de los bienes y servicios en general acabará subiendo de manera significativa y repercutirá en el precio final de la cesta de la compra de “la abuelita”.

Con la propuesta del Gobierno, “la abuelita” va a acabar más que antes por las carreteras. Además, la medida no toma en consideración la realidad de los ciudadanos que utilizan su vehículo. Muchas personas, con sueldos muy modestos, necesitan desplazarse en automóvil para acudir a su puesto de trabajo. Lo mismo ocurre en el caso de los conductores profesionales autónomos y de las pequeñas empresas. El pago por el uso de las carreteras va a suponer un nuevo golpe para las economías de estas personas y va a poner en peligro la subsistencia de muchos profesionales y empresas.



En definitiva, la medida supone un impuesto para todos los ciudadanos (aplicado de forma directa a los conductores y de forma indirecta a toda la sociedad), que acabará repercutiendo en un encarecimiento generalizado de bienes y servicios (algo así como subir el IVA de todos los bienes y servicios), siendo especialmente lesivo para las economías más débiles y menos solventes, convirtiéndose en un ataque inaceptable a los trabajadores más modestos.

La medida incentiva el uso de vías alternativas por carreteras secundarias menos seguras

El RACVN considera que la medida puede suponer un efecto disuasorio del uso de las autopistas y autovías (las carreteras más seguras). Muchos conductores podrían optar por buscar recorridos alternativos por vías secundarias gratuitas, que son mucho más peligrosas y que no están preparadas para absorber tanta densidad de tráfico. Es decir, puede fomentar la creación de situaciones de peligro que serían perfectamente evitables. El RACVN recuerda que la mayoría de los accidentes de tráfico con víctimas mortales se producen en carreteras secundarias.

Resulta llamativo que, en lugar de asumir la responsabilidad de una deficiente gestión que es causa del mal estado de las carreteras y la falta de mantenimiento y mejora de las vías, que son causa de accidentes de tráfico mortales, y destinar a este fin los impuestos cobrados a los propietarios y usuarios de los vehículos, se quiera utilizar esta realidad como excusa para cobrar más a los ciudadanos. ¿Importan los accidentados realmente? Máxime cuando los ingresos vía impositiva por el uso y tenencia de los vehículos son más que suficientes para hacer frente a esos mantenimientos. ¿A qué se dedican los excedentes? ¿a la financiación de gastos superfluos?

Un nuevo varapalo al sector del automóvil, al transporte y a la industria del país en general

El pago por el uso de todas las autopistas y autovías supone un nuevo varapalo para los sectores del automóvil y el transporte del país. Se trata de dos sectores fundamentales cuya incidencia en la economía del Estado y en el PIB son fundamentales, así como en la generación y mantenimiento de miles de puestos de trabajo. Ambos sectores se han visto fuertemente perjudicados por la coyuntura actual derivada de la pandemia, además de las amenazas constantes de nuevas restricciones y tasas.

El 2021 ha comenzado con una subida considerable de impuestos aplicados a la compra de vehículos nuevos. Si a ello se añade la amenaza constante de la subida de impuestos a los combustibles, no es de extrañar que el comienzo del año haya registrado unas cifras de matriculación y venta de nuevos vehículos muy preocupantes y con clara repercusión en la industria del automóvil. De hecho, ha afectado a miles de empresas (fabricantes, concesionarios, transportistas, etc.), que se han visto abocadas a realizar ERES y ERTES.



COMUNICADO
DE PRENSA
SERVICIOS

De poco sirven los planes de estimulación de compra de vehículos nuevos si constantemente se está dificultando su uso e incluso subiendo los impuestos de matriculación al mismo tiempo. Los datos de 2020 así lo reflejan. Las ventas de vehículos nuevos han disminuido de manera muy significativa al mismo tiempo que la venta de vehículos de más de 10 años se ha disparado (vehículos más contaminantes, más deteriorados, menos seguros, que ya deberían estar amortizados). A nivel macroeconómico, los costes del transporte repercuten en el precio del producto intermedio y final y nos hacen ser menos competitivos frente a otros países. ¿Queremos arruinar al país aún más y a los españoles tomando medidas como ésta?

El copago ¿sólo a los automovilistas?

Si se pretende que pague quien use los servicios públicos y en función de cómo los utilice, estaríamos ante una estrategia peligrosa por las desigualdades sociales que podría provocar. Contar con una red de carreteras seguras y bien mantenidas debería ser un derecho para la ciudadanía y además son indispensables para el funcionamiento del país y de la actividad económica y laboral. Las carreteras son un servicio y no un negocio. ¿Acaso el que utiliza más la sanidad ha de pagar más? La propuesta del Gobierno abre la posibilidad de que un servicio fundamental acabe convirtiéndose en una fuente de ingresos destinada a fines diferentes al uso del automóvil, y a un negocio muy lucrativo para empresas concesionarias.

El RACVN defiende la existencia de algunas vías de pago, pero sólo en circunstancias muy concretas

El RACVN defiende el uso de vías de pago en circunstancias muy concretas. Solo en los casos en los que existan vías alternativas seguras, con la capacidad de absorber el tráfico y garantizar condiciones reales de seguridad y fluidez. La propuesta del Gobierno de hacer que todas las vías rápidas sean de pago, claramente no cumple con esta condición.